



**Discapacidad** El alza del SMI y los recortes ponen en riesgo 1.600 empleos P6



# Los centros especiales de trabajo ven peligrar 1.600 empleos por el SMI

**MERCADO LABORAL/** Las empresas advierten de que las subvenciones solo cubren la mitad del 22% que subió el salario mínimo en enero, lo que se ha traducido en un impacto de siete millones en sus cuentas.

A. Zanón. Barcelona

Cataluña contaba, al cierre del año pasado, con 16.388 empleados en centros especiales de trabajo (CET), que son empresas en las que, como mínimo, el 70% de la plantilla debe tener algún tipo de discapacidad de al menos el 33%. De este colectivo, un 59,6% —o sea, 9.767 personas— tenían dificultades especiales, una denominación en la que se incluye a las discapacidades intelectuales superiores al 33% y trastornos físicos y sensoriales por encima del 65%.

Esta última es la población ocupada más vulnerable, una circunstancia que se ha acentuado con la aplicación del nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), que desde el pasado enero se situó en 900 euros brutos por 14 mensualidades, frente a los 735,9 euros de 2018. El SMI es la re-

## RADIOGRAFÍA DEL SECTOR

### > Personas con discapacidad en los centros especiales de trabajo

Número de empleados.

■ De ellos, % personas sin dificultades especiales



Fuente: Libro blanco para la formación, empleo y trabajo de las personas con discapacidad y especiales dificultades en los centros especiales de trabajo de Catalunya

### > Ingresos

En porcentaje.



ferencia para la mayoría de este segmento del mercado laboral y, según denunció ayer la Associació Empresarial d'Economia Social (Dincat), el alza de los costes laborales pone en riesgo la continuidad de unos 1.600 puestos de tra-

bajo, o sea, el 15% de los empleados con mayor grado de discapacidad de Catalunya.

El 50% del salario de este colectivo se paga con subvenciones y el resto corresponde a su productividad. De la subida del 22% del SMI, los cen-

tros especiales de trabajo financian once puntos con el alza automática de las aportaciones públicas, pero el resto aseguran que no lo pueden repercutir porque los contratos están cerrados y porque se mueven en un entorno de

servicios a precios muy bajos. La consecuencia es que han tenido que asumir unos 7 millones de costes adicionales, lo que en algunos casos implica entrar en pérdidas, según explicaron ayer el presidente de Dincat, Manuel Palou, y el profesor de la escuela de negocios IESE Joan Fontrodona, durante la presentación del *Libro blanco para la formación, empleo y trabajo de las personas con discapacidad y especiales dificultades en los centros especiales de trabajo de Catalunya*.

Esta situación se une al recorte de ayudas públicas: de 2010 a 2018 los discapacitados que trabajan en un CET han subido un 38%, pero la subvención global se ha contraído en un 7%, sobre todo por las menores transferencias del Estado. La consecuencia es que las empresas

**Repensar un modelo que fue de éxito**

Dincat cree que el modelo de centros especiales de trabajo fue exitoso en el pasado porque sirvió a las personas con menos discapacidades como pasarela hacia el mundo laboral ordinario. Pero esto se ha desvirtuado por la falta de ayudas para acompañar a este colectivo, que prefiere no dar el salto y quedarse en un CET. La patronal de los centros especiales de trabajo planteó ayer a la Generalitat un nuevo modelo que permita a las personas desarrollar todas sus capacidades laborales, mayor flexibilidad en los horarios, itinerarios adaptados y sensibilizar a todo el tejido empresarial.

asociadas a Dincat exigen elevar la ayuda pública que reciben de los 83,5 millones de euros de 2018 hasta los 125 millones para garantizar la continuidad de los 184 centros especiales de trabajo censados en Catalunya.